

LA II REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL

No muere el hombre si su muerte vive
(Lucano)

MIGUEL LÓPEZ CORRAL
Capitán de la Guardia Civil
Doctor en Derecho

La caída del general Primo de Rivera y la crisis económica de 1829 despejaron el camino para el advenimiento de la II República, uno de los períodos más convulsos de la reciente historia de España, como se sabe.

También lo fue para la Guardia Civil, que de vivir su época más esplendorosa, como fue la dictadura primorriverista, pasó, abruptamente, a vivir la más trágica de su historia, consecuencia de las contradicciones internas, la agitación social, el clima de violencia y el enfrentamiento entre dos modos de entender el funcionamiento del país que caracterizaron el devenir de la experiencia republicana, cuya trágico final fue ni más ni menos que una guerra civil que durante tres años sacudiría al país de esquina a esquina.

Explicar el drástico cambio de escenario que para la Guardia Civil supuso la mutación de régimen no es difícil. Sí lo es entender el grado de violencia que alcanzaron los ataques a la Institución. Sobre lo primero, es la evolución histórica quien nos proporciona las claves, como ha debido quedar claro hasta aquí, la Guardia Civil suponía la principal herramienta que manejaba la burguesía y la oligarquía instaladas en el poder para defender su posición dominante y su modo de ver España. En una sociedad que asistía a las reivindicaciones de los movimientos obreros emergentes desde finales del siglo XIX, el desgaste que para cualquier Institución vinculada a un régimen burgués y, por tanto, en oposición a todo cambio de sistema establecido, era enorme. Y esto fue lo que le ocurrió a la Guardia Civil, que llegó a la II República con un desgaste de imagen formidable. Utilizada con escaso tacto por quienes habían ostentado el poder, su papel de principal protagonista en la defensa del orden público bajo planteamientos represivos

y militaristas, tenía necesariamente que suponer un coste en un régimen que suponía la llegada al poder de aquellos a quienes la Institución se había enfrentado en las barricadas, dicho sea metafóricamente.

Por tanto, no debe sorprender que entre los sectores más radicales de quienes habían suscrito el Pacto de San Sebastián de 1930 y de las bases que sustentaban el republicanismo de izquierdas, se pidiese la disolución de la Guardia Civil. Otra cosa es, ciertamente, que el ensañamiento con sus hombres llegase al límite de vesania con que se hizo, porque ello suponía un profundo desconocimiento de la esencia del Cuerpo, de su filosofía de servicio y de su instrumentalización por parte del Poder. Julián Besteiro, probablemente el socialista más clarividente y sensato de su tiempo, fue quien acertaría en el diagnóstico cuando alarmado por los insistentes rumores que le llegaban sobre la disolución del Cuerpo, se opuso con el argumento de que sería un error disolver a una Institución que funcionaba como una máquina admirable. Bastaba, en opinión del político gallego, en hacerla funcionar a favor de corriente, como lo había sido por quienes habían ostentado el poder hasta abril de 1931.

Además, hasta agosto de 1932, fecha del renunciamiento del general Sanjurjo, la Guardia Civil no hizo mérito alguno para que se la disolviese ni se la atacase. Todo lo contrario, porque su papel durante el trasvase de poderes de la monarquía a la república fue impecable. Ni se puede afirmar con la rotundidad que se ha hecho desde sectores monárquicos, que la inhibición de la Guardia Civil provocó el fin de la monarquía en la figura de Alfonso XIII, ni que con su actitud pasiva favoreció el cambio de régimen. Simplemente se limitó a actuar en consecuencia con una situación sobrevenida en la que lo más prudente era hacer lo que hizo su Director General, el bilaureado Sanjurjo: mantenerse al margen de cualquier veleidad que contrariase la voluntad popular, entre la que se encontraba una gran parte de una burguesía que desertaba de su tradicional papel de freno al espíritu innovador del pujante movimiento obrero, para compartir el poder con él, al estilo del modelo que se había impuesto en las democracias europeas. Pretender utilizar una vez más a la Guardia

Civil, como lo hizo el gobierno del almirante Aznar en su intento de mantener el régimen monárquico, era dejar a la Institución a los pies de los caballos, en un escenario insostenible. Lo supo ver bien el general Sanjurjo, que se negó a prestar el apoyo de la Institución que dirigía a una causa difícil de mantener tras los resultados electorales del 12 de abril.

En la Guardia Civil, al igual que en la mayoría de los españoles, había prendido la idea de que una nueva experiencia republicana podía ser la salida airosa para el país, que veían en la República el alumbramiento de una nueva forma de vida. Esta voluntad de cambio hizo que cuando Sanjurjo fue convocado por el desalentado gabinete del almirante Juan Bautista Aznar en la misma tarde del día 12 para que se pronunciase sobre sí en momentos tan trascendentales la Monarquía podía contar con la Guardia Civil, el general se limitase a responder con un escueto: "Hasta ayer por la noche podía contarse con ella" (1). Y quien esto decía era uno de los militares más monárquicos, que además dirigía a una Institución cuya mayoría de oficiales también eran monárquicos convencidos, como parecía normal en un Cuerpo que había vivido su período de mayor apogeo bajo el paraguas de la Dictadura. Y aún más. En el caso de Sanjurjo, profesaba una amistad sincera hacia el almirante Aznar y muchos de los hombres públicos del régimen monárquico. Otra cosa era, ciertamente, la relación de Sanjurjo con el monarca, resentida desde que Alfonso XIII retirase la confianza a Primo de Rivera en 1929. Pero de esta frialdad no cabe extraer conclusiones sobre la actitud adoptada por el director de la Guardia Civil en la crisis. Además, el hecho de que el mismo Sanjurjo acompañase a la familia real durante el viaje hasta la frontera con Francia y se ocupase de la protección del S.M. hasta Cartagena, se debió a una petición expresa del nuevo Gobierno y del monarca para que fuese la Guardia Civil la encargada de darle escolta, porque no se fiaba de ninguna otra fuerza para garantizar la seguridad de la familia real (2).

Lo demás en esta fase capital del proceso de cambio, respondió a lo que cabía esperar de una Institución neutral, responsable de mantener el orden. Así debe interpretarse el temor de sus mandos ante la mezcla de albo-

rozo e incertidumbre que anidaba en las masas, porque mal entendida podía desembocar en un enfrentamiento entre partidarios de la República y de la Monarquía, en cuyo caso la Guardia Civil, como principal garante del orden, como integrante de las Fuerzas Armadas y por un deber de lealtad y disciplina “que quería –señaló Sanjurjo– extremar en momentos tan solemnes”, debía actuar en la línea de: “acatar –añadiría el general– la soberanía del pueblo y la voluntad nacional, porque entendía que el Ejército es de la nación” (3). Según la versión de Sanjurjo, esta fue la razón por la que la Guardia Civil tomó las calles, pero “sin la intención –diría el Director General– de disparar contra el pueblo. La voluntad popular ha querido la República y la Guardia Civil respetará y defenderá la legalidad establecida por las urnas” (4). Fue así hasta el punto de que, una vez hecha por Romanones la transmisión de poderes conforme a lo exigido por el Comité Revolucionario, se puso en contacto con quienes desde del republicanismo lo requerían, acudiendo a la invitación de Alcalá Zamora para reunirse con el Gobierno Provisional y con su nuevo ministro de la guerra, Manuel Azaña, que le pidió prestase la colaboración de la Guardia Civil a la República. Desde su concepto de disciplina y lealtad, la Guardia Civil acató colaborar con el nuevo Gobierno y se puso a la orden de las nuevas autoridades. Nada, en cualquier caso, que hiciese aconsejar el desdén y el escepticismo que algunos sectores del republicanismo dispensarían a la Guardia Civil tras su ascensión del poder, y que ayudaría a que el desencanto y la frustración también prendiesen en los hombres de la Guardia Civil, como lo harían en una parte de la sociedad, haciendo del maridaje inicial una convivencia tensa y difícil con el paso de los meses.

Desencanto y frustración

Las razones residían en las contradicciones internas que caracterizaron a la II República y en las bases sociales que la sustentaban, donde no faltaban los tradicionales enemigos de la Guardia Civil.

Ambas razones resultan claves para comprender el tránsito de la Guardia Civil por la II República, en especial la constitución de la

arquitectura político-social del régimen. En el caso de la burguesía, la mayoría profesaba respeto y hasta simpatía por la Guardia Civil, pero en el del movimiento obrero no era así. Ninguno de los tres grupos mayoritarios que configuraban la izquierda radical española (socialistas revolucionarios, comunistas y anarquistas) veían con buenos ojos a la Institución, en especial los últimos, que aprovecharon la oportunidad que les brindaba la República para resucitar su viejo litigio con la Benemérita y arremeter contra ella. Fue Manuel Azaña quien mejor definiría la nueva situación para la Guardia Civil: “Mucha gente –decía Azaña– odia a la Guardia Civil, sobre todo entre la clase obrera. Y mucha gente adora a la Guardia Civil, considerándola como sustentadora del orden social. A estas dos posiciones, que son antiguas, se añade ahora una gran pasión por ambas partes” (5).

Los hechos hacían certera la reflexión de Azaña. Todos, desde la burguesía al sector más radical del movimiento obrero, querían emprender las reformas que enterrasen la España del caciquismo, pero discrepaban sobre el alcance que debían tener la reforma agraria y el recorte de poder de Iglesia y Ejército, principales objetivos de aquel reformismo. Tampoco la Guardia Civil escapaba a las críticas:

“La Guardia Civil –denunciaban sindicalistas anarquistas y comunistas– significa atropello, significa crimen, significa tortura, significa Ley de Fugas. Todos los movimientos democráticos de España han marchado animados por un grupo unánime y angustioso: ¡Disolución de la Guardia Civil! ...En nombre de los millares de hombres torturados y asesinados por la Guardia Civil, protestamos... La Guardia Civil fue el principal y más sanguinario colaborador de Primo de Rivera y de su más asesino sargentón Martínez Anido. La Guardia Civil es el más genuino representante de la España oscurantista, de la España sanguinaria, que ya es pasado, de otra España muerta que no es la España luminosa y progresista de hoy”.

Por el contrario, estaban los sectores conservadores de la burguesía y los propietarios

rurales, que la seguían viendo como principal sostén del orden, e injustamente maltratada:

“¿Qué sería de España si no fuera por este gran Instituto? –Se leía en la prensa conservadora–. Comprendemos los deseos de mucha gente maleante, que ve en la Guardia Civil un freno a sus ímpetus revolucionarios; comprendemos y justificamos el odio de los que viven siempre al margen de la Ley, que encuentran siempre en las carreteras la acostumbrada “pareja”, que les estropea...las mil fechorías que llevan pensadas.

No podemos dejar de comprender que para “algunos” la Guardia Civil es la valla de acero que se levanta en su camino... ¿Cómo no han de pedir su aniquilamiento los maleantes, los amigos de lo ajeno... Pero la masa general del país sabe perfectamente que sin prejuicio político alguno, pensando en derecha o en izquierda, la Guardia Civil es el sostén del orden y de la sociedad? Sin ella hubiera terminado hace tiempo. Por eso se la ovaciona con entusiasmo, por eso se sale a su defensa...A la Guardia civil no se la puede mezclar en política. Ha demostrado que puede servir a cualquier forma de gobierno...ha estado siempre al lado de la Autoridad...sin la obediencia leal de la Benemérita, la República no hubiera llegado tan sedante” (6).

En este clima de confrontación, sobrevino el desencanto y la frustración, las dos palabras que definen las esperanzas depositadas en el cambio de régimen, en la República. Y lo fue para todas las fuerzas en juego. Para el movimiento obrero, sindicatos y campesinos, porque se sentían engañados por un Gobierno que tildaban de burgués y aliado del viejo caciquismo; para la burguesía y clases acomodadas, porque el radicalismo parecía conducir al caos, a la revolución y al desorden.

El resultado de las diferencias fue el desencuentro y consiguiente aumento de la conflictividad social y la insurrección, liderada por los sindicatos comunistas, socialistas y anarquistas, partidarios de la acción directa y la huelga para forzar se cumpliesen sus aspiraciones. La fórmula no variaría con respecto al pasado,

y ante la quema generalizada de conventos, toma de tierras y ataques a cuarteles de la Guardia Civil, el gobierno republicano echó mano de los viejos recursos para contener los desórdenes.

Una vez más los medios eran el recurso a la declaración del estado de excepción y a la Guardia Civil. Una vez más, también, con el déficit de medios y las armas de siempre. Porque la República había heredado de la Restauración un problema sin resolver, y la Guardia Civil seguía actuando con la misma mentalidad e idénticos medios de que disponía desde su fundación para enfrentarse a las masas. Los resultados siguieron siendo los mismos: muertes y heridos entre los manifestantes y las fuerzas del orden.

Parecía que la sombra que perseguía a la Guardia Civil a causa de la miopía de los políticos y de su propia mentalidad y formación no iba a abandonarla tampoco con la llegada de la República, y la contendencia que imprimía a sus acciones resucitaría fantasmas del pasado. Los sectores radicales del movimiento obrero volvieron a la carga contra la Guardia Civil, exigiendo su disolución. Superado por los acontecimientos y preso de sus contradicciones, el gobierno Azaña encargó un proyecto de disolución al ministro de la Gobernación, Miguel Maura, que se opuso categóricamente, con el apoyo de sectores burgueses y terratenientes, temerosos de la indefensión que el proyecto generaba.

La resistencia logró frenar el proyecto y orientar las intenciones de Azaña hacia lo más sensato: la reforma del modelo policial. La idea era buscar alternativas a la Guardia Civil a la hora de contener los disturbios callejeros, reservando a la Benemérita para el medio rural. En esta dirección cabe interpretar la implantación del Cuerpo de Seguridad y Asalto. El nuevo Cuerpo, con una dotación inicial de 800 efectivos, estuvo operativo el 14 de octubre de 1931, y constituiría según el ministro de Gobernación: “un elemento básico del orden”, que favoreció el que la Guardia Civil quedase descargada de su misión de “enfrentarse en las calles con las turbas y grupos de revoltosos, concentrando su acción eficazísima en los pueblos y en los campos, que es la propia del Instituto” (7).

Pero la reforma no solucionó los problemas

para la Guardia Civil, porque las tensiones de los primeros momentos se trasladaron al campo a causa de la ralentización de la reforma agraria y muchos pueblos sufrieron la sacudida de la impaciencia campesina a partir de septiembre de 1931, de modo que varias localidades fueron testigos de la irritación de jornaleros y campesinos sin tierras que cultivar, materializada en forma de ocupaciones de fincas, manifestaciones y ataques a la Guardia Civil, una vez más convertida en el principal obstáculo de sus intenciones.

Con esta tensión de fondo y la reforma policial sin desarrollar, lo predecible era que corriese la sangre y que la Guardia Civil volviese a sufrir las iras de los desesperados campesinos, al tiempo que su estado de esperanza inicial se trocaba por otro de desencanto y temor por el rumbo que tomaba la República. El punto de inflexión lo supusieron los sucesos de Castilblanco, en Badajoz, y de Arnedo, en La Rioja.

En Castilblanco, la nochevieja del 31 de diciembre de 1931 se produjo la horrible muerte de un cabo y tres guardias civiles del Puesto a manos de un grupo de campesinos encolerizados por la promesa incumplida de un traspaso de tierras de los terratenientes para poder cultivar: “Los ánimos estaban excitados —diría el fiscal del caso— por predicaciones y propaganda violenta, que, con ilusión engañosa, pretendían conseguir esa libertad tan ansiada por todos y tan estorbada por los obstáculos de la propiedad, el nacimiento y de la tradición, en lugar de atender esas reivindicaciones con criterio tranquilo, palabra serena y paciencia larga...” (8).

En este clima, unos trescientos campesinos se concentraron en el Ayuntamiento y en la Casa del Pueblo de Castilblanco. No era una protesta violenta, pero molestaba al terrateniente, que exigió a su guarda forestal y mozo de mulas, Felipe Maganto, que como alcalde del pueblo ordenase a la Guardia Civil disolviese la concentración. La Benemérita se vio obligada a cumplir el mandato que desde la proclamación de la República le exigía acatar las órdenes de los alcaldes. Acudieron el cabo comandante de Puesto, José Blanco González y los guardias civiles Agripino Simón Martín, José Matos González y Francisco González

Borrego. La tensión excitó los ánimos y el guardia civil Agripino Simón disparó su fusil sobre un campesino, que murió en el acto. La reacción de los campesinos fue agredir con navajas y escopetas a los guardias civiles, cuyos cadáveres fueron salvajemente mutilados.

La noticia sumió en el estupor a toda la Guardia Civil, que conmocionada mostró su malestar ante su Director General en una reunión de jefes en la que se llegó a insinuar la posibilidad de una sublevación contra el Gobierno (9). Sanjurjo, no aprobó la veleidad. Se limitó a mostrar su indignación, pero sus palabras delataban un estado de ánimo que no descartaba el recurso a la sublevación en el futuro. Sanjurjo no era por aquellos momentos presa del pesimismo, pero estaba desconcertado por la división que vivía la sociedad española, y lo sucedido en Castilblanco era un ejemplo de aquella quiebra: mientras la prensa de derechas alababa a la Guardia Civil y en muchos pueblos se le rendían homenajes, desde la izquierda radical se restaba importancia a lo sucedido o se justificaba lo ocurrido.

Este estado de ánimo es lo que explica la contundente actuación de la Guardia Civil en las manifestaciones que a primeros de enero tendrían lugar en Arnedo, Ecija, Epila, Zalamea de la Serena, Los Barros, Calzada de Calatrava o Jeresa (Valencia). De ellos, sería el de Arnedo el que por su magnitud y consecuencias cobraría mayor relevancia.

En la localidad riojana se vivía una gran tensión desde las elecciones municipales de abril. Faustino Muro, propietario de una industria de calzados presionaba a sus trabajadores con despedirlos si no daban su voto a los monárquicos. Cumplió su amenaza con uno de ellos, lo que motivó la solidaridad de los compañeros del despido. Durante más de diez meses se entabló un conflicto entre sindicatos y patrono, que obligó al arbitraje de las autoridades locales y provinciales, sin éxito a causa de la negativa de Muro a admitir a los despedidos. En esta situación se llegó al 5 de enero de 1932. Ese día se declaró la huelga general en Arnedo, aprovechando la visita del Gobernador Civil, para cerrar un principio de acuerdo con otros industriales de la localidad para que admitiesen a los trabajadores despedidos. El

Gobernador Civil se hizo acompañar por el teniente coronel Rodrigo Palacio, Jefe de la Comandancia de Logroño, y por un contingente de guardias civiles concentrados de los Puestos cercanos, sabedor de la tensión que se vivía y de los rumores que hablaban de la distribución de armas entre los huelguistas. En este clima de tensión, varios centenares de manifestantes se concentraron en la plaza del ayuntamiento, donde la Guardia Civil se había desplegado para impedir el acceso de los manifestantes a lugar de reunión de las autoridades. Cuando este cordón de seguridad se intentó romper, sonó un disparo que hirió al cabo José Camarzana y sobrevino el caos. El recuerdo sombrío de lo ocurrido en Castilblanco pasó por la mente de los guardias civiles y sus descargas impactaron sobre los manifestantes. En cuestión de segundos la plaza quedó despejada, pero en la plaza yacían los cadáveres de cuatro mujeres, un niño y un hombre Tragedia que aumentaría en los próximos días elevando el número de víctimas mortales a once (veintisiete personas más resultaron heridas). Para la Guardia Civil la lección a aprender estaba en la historia, en decenas de sucesos similares anteriores (recuérdense los de Riotinto, en 1888, calcados a los de Arnedo, aunque con el Ejército como protagonista) (10), en los que una adecuada preparación, una planificación correcta del despliegue de la fuerza, y en el peor de los casos unos tiros al aire, hubiesen bastado para evitar las vidas malogradas. Pero en las enseñanzas recibidas no figuraba el tratamiento de masas, sólo la instrucción en orden cerrado. La consecuencia seguía siendo aborar el camino de más sangre y dolor. Por supuesto, también para la Guardia Civil, abocada a un futuro incierto por su falta de previsión.

Pronto tendría ocasión de comprobarlo el Instituto armado. A los pocos días de los sucesos de Arnedo, las presiones radicales cerca de Manuel Azaña hicieron que el gobierno cesase al general Sanjurjo al frente de la Institución y lo destinase a la dirección del Cuerpo de Carabineros, de menor prestigio. La medida, tomada en medio de un clima de exaltación general por las huelgas que azotaban el país, aumentaba la tensión en el seno de un Ejército preocupado por el alcance de la

reforma militar, de la que Sanjurjo se había convertido en uno de sus principales detractores. Y es que en aquellos momentos, eran pocos los militares conservadores que no veían en la Reforma militar un intento de triturar la potencia del Ejército, de arrinconarlo socialmente y de desposeerlo de su poder. Por eso, cuando su inspirador, el propio Azaña, propuso el cierre de la Academia General Militar de Zaragoza y la amplitud de la jurisdicción civil en detrimento de la militar (la Ley de Jurisdicciones se suprimió el 22 de abril de 1931), muchos pensaron que el siguiente paso era disolver la Guardia Civil, y eso era llegar demasiado lejos en el desafío planteado a los militares. Entonces, muchos miraron hacia los generales de referencia del momento, y les exigieron defender el herido orgullo militar, a la vieja usanza.

Sin duda, Sanjurjo era uno de aquellos generales de referencia, el estandarte que se necesitaba para defender el honor de la vapuleada Guardia Civil y el orden público amenazado, tan apreciados por la familia militar “...en tanto yo esté al frente de la Guardia Civil –diría Sanjurjo– no habrá anarquía en España” (11). Su cese al frente de la Institución no sólo no sería bien recibido en el ala conservadora del militarismo, sino que fue aprovechado por ésta para que el general encabezase una sublevación contra el Gobierno. La sucesión de incidentes entre el obrerismo y las fuerzas del orden, se saldaron con algunos casos de trágicas consecuencias, como en Villa de don Fadrique (12); la declaración de una huelga general el 1 de mayo, o incidentes como el protagonizado por el teniente coronel Mangada y el general Goded en Carabanchel, que favorecieron los planes de los militares exaltados, y consiguiendo que Sanjurjo cediese a las presiones.

La misión principal de Sanjurjo consistía en viajar por España para conseguir adhesiones de las principales guarniciones y sobre todo pulsar el estado de ánimo de la Guardia Civil, cuyo concurso se entendía vital para el éxito de la sublevación. Pero ni en la Guardia Civil había el consenso suficiente que garantizase su adhesión a la rebelión, ni el Gobierno estaba desinformado de lo que se gestaba. De hecho, cuando finalmente la sublevación se produjo, el 10 de agosto de 1932, en Madrid la

actitud de los guardias civiles de servicio en el Palacio de Comunicaciones y en el Ministerio de la Guerra abortaron los inmaduros planes rebeldes cuando no sólo se negaron a obedecer las órdenes de los militares sublevados, sino que les hicieron frente, obligándoles a claudicar de sus intenciones.

En las demás provincias la Guardia Civil permaneció a la expectativa, escéptica o al margen de lo que se tramaba. Sólo en Sevilla existía un grupo mayoritario de oficiales dispuesto a actuar, dada la ascendencia de Sanjurjo en la guarnición de la benemérita en la capital andaluza y porque la Institución había estado sometida desde la proclamación de la República a constantes ataques: *“¡Guardias civiles de Sevilla –arengó el exdirector de la Benemérita en el amanecer del 10 de agosto– hay que salvar a España de la ruina y la desmembración! ¡Hay que restablecer las libertades perdidas! Soy un general sublevado contra el Gobierno y me dispongo a perderlo todo para procurar un beneficio a España. Ya me conocéis como militar y como Director vuestro que he sido ¡Si confiáis en mí, seguidme; si me creéis un traidor, fusiladme!”*

Los guardias civiles sevillanos siguieron a su exdirector general, pero en Madrid todo se había desmoronado tras leves escaramuzas y en otras capitales andaluzas como Granada y Cádiz, los militares sublevados habían fracasado. La posición de ventaja del Gobierno era clara, y Azaña se dispuso a sofocar el único brote de entidad, ordenando que el grueso de las tropas marchase contra Sevilla. En un primer momento Sanjurjo se dispuso a resistir, pero la mayoría de la oficialidad de la guarnición se negó a combatir contra sus compañeros de armas, y en aquellos momentos el general africanista entendió que sólo con el apoyo de la Guardia Civil su posición era indefendible (13).

Las consecuencias del apoyo proporcionado por parte de la oficialidad al pronunciamiento fueron fulminantes para la Guardia Civil. La sanjurjada eliminaría la oposición de quienes defendían el mantener a la Institución dentro del organigrama del Ministerio de la Guerra, y el gobierno lo aprovechó para pasar el control al Ministerio de la Gobernación e ir relevándola por la Guardia de Asalto en las luchas callejeras. Al tiempo, pretendía ofrecer una

imagen de fuerza, rigor y ejemplaridad ante quienes se embarcasen en futuras aventuras golpistas, lo que provocaría un cisma de formidables consecuencias en la oficialidad de la Guardia Civil. Todo esto significó la rebelión del 10 de agosto de 1932. Esto y acelerar la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, lo que también tendría consecuencias para la Benemérita, como veremos.

Con el camino despejado, el 12 de agosto se suprimió la Dirección General de la Guardia Civil del Ministerio de la Guerra, transfiriendo sus funciones al Ministerio de la Gobernación, donde se creaba una Inspección General bajo las órdenes directas de un miembro del Estado Mayor del Ejército (14). El decreto del día siguiente, disolvía el 4.º Tercio de Sevilla, medida anunciada tras el fracaso del pronunciamiento, y que no era sino el inicio de un baile de ceses y nombramientos que a partir de ahora caracterizaría la política de personal republicana con respecto a la Guardia Civil, causante de una división cada vez más acentuada en la hasta entonces monolítica posición de la oficialidad de la Institución, afectada de este modo por la fractura socio-política típica de la España republicana. A mayores, el 23 de agosto se suprimiría el cargo del Subdirector General de la Guardia Civil, que tanto había conseguido conquistar, y como tal cesado su titular, el general de División Benito Pardo González. Era claro que los cambios tenían por objeto no sólo disminuir la potencia de la Benemérita, sino ejercer un control directo sobre ella por parte del Ministerio de la Gobernación, pretensión largamente perseguida por el civilismo en España.

Para maquillar los cambios, el Gobierno pretendió dar satisfacción a varias demandas planteadas por las bases, tratando con ello de ganarse su confianza. Por tales deben entenderse el aumento de los salarios y pensiones, la mejora laboral y hacer más justa la promoción profesional (15). Se trataba, que duda cabe, de medidas cargadas de buenas intenciones, pero que resueltas desde el populismo que caracterizaba la acción de Gobierno, tuvieron la consecuencia de distanciar a las bases de la oficialidad, abriendo una brecha en la disciplina que tendría su manifestación tras las elecciones del Frente Popular y luego tras la guerra en la zona republicana.

Pero para completar el círculo quedaba todavía un tramo que suponía una asignatura por aprobar: la sustitución de la Guardia Civil por la Guardia de Asalto en el tratamiento de los desórdenes públicos.

La medida se situaba en el contexto del modelo policial en diseño y era coherente con los planes iniciales de la República, que entendió que no se emplear a la Guardia Civil en la forma en que se venía utilizando, “Y esto por dos razones –añadiría Casares– porque es forzosamente cruenta su intervención y porque además se vuelve ineficaz a fuerza de fatigarla día tras día y noche tras noche...La Guardia Civil ha de ser reservada para aquellas intervenciones graves que puedan exigir las perturbaciones que sobrepujan la potencia-lidad de las fuerzas flexibles de vanguardia o asalto, lo cual evitará que el prestigio del bene-mérito Instituto se desgaste en choques constantes con el pueblo...”. La respuesta estaba en sustituirla por la Guardia de Asalto a través de un proceso discreto de distribución de efectivos y de dotación de medios adecuados, empleándola en los momentos oportunos.

Sin embargo, hacia principios de 1932, el proceso no iba a resultar fácil a causa de las tensiones que vivía el país. A pesar de que el fracasado pronunciamiento de Sanjurjo había favorecido que Azaña pudiese sacar adelante la Ley de Bases de la Reforma Agraria, en los seis meses siguientes a su aprobación sólo se había podido aplicar en catorce provincias por la lentitud burocrática y los altos costes de las expropiaciones, lo que sumado a los devastadores efectos de la crisis de 1929 en las clases obreras, propició un clima de confrontación que iba a tener de nuevo en el medio rural su principal teatro de operaciones. Una vez más fue el anarquismo el principal ariete de la ofensiva contra el orden establecido. El Gobierno respondía a la provocación con el envío de refuerzos militares y de guardias de Asalto, como ocurrió en Casas Viejas, en los albores de 1933. En este pequeño pueblo de braceros, instalado en la comarca jerezana, los anarquistas atacaron el cuartel de la Guardia Civil, hiriendo de gravedad a dos guardias civiles. La desproporcionada represión de la Guardia de Asalto acabó con la vida de una veintena de campesinos, muchos de ellos fusilados en una era del pueblo. Los hechos causaron una gran

conmoción en la opinión pública y Casas Viejas pasó a convertirse en la diana hacia donde apuntaban las críticas al Gobierno de Azaña. Sin apenas argumentos para defender la actuación de la Guardia de Asalto, el Gobierno cedió y en septiembre de 1933 se producía la crisis de poder.

La puesta de largo de la Guardia de Asalto demostraba que sustituir a la Guardia Civil no era fácil y que con media España en pie de guerra decorar su camino sólo con luces esto era poco menos que imposible en el ecuador de la II República. En el fondo, puede que no todos los abusos atribuidos a la Benemérita en sus enfrentamientos con las masas amotinadas fuesen fruto de sus torpezas y mentalidad. Incluso que lo fuesen por la irresponsabilidad de los gobiernos de turno. Necesariamente tenía que haber algo más.

El bienio revolucionario

La reflexión no es una frivolidad gratuita. Los gobiernos que sustituyeron al de Manuel Azaña se encontraron un país dividido, que obligó a la convocatoria de elecciones para intentar gobernarlo. En los comicios de noviembre de 1933 ganaron las derechas, y entre los intereses de unos y la intolerancia de otros, España continuó desgajándose. Para frenar el descontento social y de unas masas fanatizadas, el gobierno de Lerroux volvió a delegar en la Guardia Civil “La Guardia Civil –llegaría a decir don Alejandro– se ha convertido por la ejemplaridad admirable y exaltada de su eficacia, en la garantía máxima del Estado y de la sociedad, cuya perdurabilidad asegura su propia naturaleza” (16). Todo ello con el objeto indisimulado de que la Guardia Civil continuase siendo el principal dique de contención contra la intolerancia y radicalización que caracterizaba la frustración del movimiento obrero y campesino.

Diffícil papeleta para la noble Benemérita, colocada otra vez en situación complicadísima, y abocada a sufrir las iras de un sector del pueblo que la veía como bastión de un régimen opresor y provocador: –¡comer república!, se jactaba en repetir la patronal a los jornaleros desde el revanchismo que le concedía su recuperada posición de privilegio– y

que no estaba dispuesto a perder su oportunidad histórica. El descontento de obreros y campesinos se transformó en más acciones violentas, en las que la Guardia Civil volvía a estar en el punto de mira de los revoltosos y tuvo que multiplicarse para contener los desórdenes que brotaban por todas partes, desde Extremadura a la cuenca del Llobregat, sembrando de víctimas el paisaje peninsular, entre ellas varias decenas de guardias civiles.

Sin embargo, el balance de víctimas de fines de 1933 sería irrelevante si lo comparamos con el que sobrevendría a partir de la primavera de 1934, cuando Largo Caballero y el sector dirigente del denominado “grupo bolchevique” impuso su criterio en el PSOE de que era necesario a romper con la legalidad republicana e ir a la huelga general por el temor que le producía el incontenible avance de la derecha, el brusco frenazo a las reformas azañistas y el auge del fascismo en Alemania e Italia. Una vez más los cuarteles de la Guardia Civil fueron el blanco preferido del obrerismo.

A pesar de la frecuencia de los ataques, ningún gobierno había diseñado planes especiales de protección de las casas cuarteles, obligando a sus defensores a una defensa numantina, en una notable inferioridad de condiciones, con trágicas consecuencias para los guardias civiles y sus familias. Para infortunio tampoco se había procurado la potenciación de un servicio de información capaz de penetrar en el tejido social y político, que detectase las intenciones revolucionarias. Sólo desde esta perspectiva puede entenderse que numerosos Puestos de la Guardia Civil fuesen sorprendidos una vez más en su tradicional aislamiento e indefensión por la brutal acometida iniciado en la madrugada del 5 de octubre de 1934 por un movimiento revolucionario que sólo admite comparación en violencia con la Revolución Rusa o la asonada espartaquista alemana de 1918. Una violencia que apuntaba su prioridad hacia la Guardia Civil, considerada como el principal obstáculo de los primeros momentos, que era preciso aniquilar para tomar su armamento y dominar el territorio.

Asturias, donde los socialistas habían conseguido movilizar a unos treinta mil mineros, fue donde la Guardia Civil sufrió las peores embestidas. Posada de Llanes, Mieres, Rebo-

llada, Santullano, Caborana, La Rabonada, Ciaño, El Entrego, Sama de Langreo,...eran sólo algunos de los enclaves asediados, donde los guardias civiles se vieron obligados a permanecer refugiados con sus familias. Pero era muy difícil que ante tan elevado número de asaltantes y ante el poder demoleedor de la dinamita los defensores pudiesen resistir el asedio. Sin embargo, fieles a su norma, los guardias civiles se negaron a entregar el armamento y a rendirse. La desigual pelea fue intensa y dramática, y duró hasta que los muros de los cuarteles resistieron en pie o la última bala se disparó. Bajo los escombros de los cuarteles sucumbieron Puestos enteros, como los de Sama de Langreo, Ciaño y El Entrego, con sus familias incluidas. En total, 98 casas cuartel quedaron destrozadas en la jornada del día 5 de octubre por la dinamita revolucionaria (17). Sólo en el de Sama perecieron seis decenas de guardias civiles, con su capitán, el heroico Alonso Nart a la cabeza.

Este heroísmo, mezcla de ingenuidad e ignorancia de la dimensión de las intenciones revolucionarias con un desarrollado sentido del deber, no fue sin embargo estéril. La férrea resistencia de los cuarteles y las columnas de apoyo enviadas para socorrerlos contribuyeron a sostener la revolución el tiempo preciso para que el Gobierno reaccionase con la movilización del Ejército y pudiese fijar sus operaciones en las cuencas asturianas y palentino-leonesas. Desde Madrid el ministro de la Guerra, Hidalgo, encargó al general Franco que dirigiese el dispositivo para sofocar la revolución. Franco dispuso la inmediata partida hacia Asturias de tropas de la Legión y los Regulares trasladados desde África y un amplio despliegue de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto.

El propio Franco recomendó al comandante de la Guardia Civil Lisardo Doval Bravo para que dirigiese las investigaciones y arrestase a los cabecillas del movimiento. Doval era paisano y compañero de promoción de Franco, y éste conocía bien al oficial de la Guardia Civil. Se trataba de un oficial con fama de duro y conocimiento de Asturias, donde había estado destinado como teniente y capitán hasta que el gobierno Azaña lo relevó para darle un puesto marginal. Su misión principal consis-

ría en dismantelar los núcleos principales de la revolución. Pero donde Doval realmente se aplicó con entusiasmo fue en el uso de los plenos poderes que se atribuyó para descubrir a los cabecillas de la revolución que habían huido, en especial González Peña. Para ello no dudó en practicar métodos expeditivos, lo que aumentaría su fama ante la opinión pública y que desde los sectores izquierdistas se exigiese su destitución. Lerroux, a quien se le recordaba su etapa como vehemente defensor de los acusados en el proceso de Montjuich, ordenó abrir una investigación reservada sobre las actuaciones de Doval, cuyas conclusiones supusieron su relevo en Asturias. Como otros muchos oficiales de la época, Doval encarnaba el prototipo de oficial de la Guardia Civil autoritario, pero honesto, característicos de la estética de la dictadura primorriverista, cuya etapa añoraba por lo de que esplendor significaba para su modo de entender la profesión que había abrazado. Como otras, se trataba de una conducta personal, que la Guardia Civil como Institución no podía controlar, y que merecía el aplauso de una parte de su oficialidad y la censura de la otra. Era la consecuencia de la división profunda que vivía la sociedad española y sus Fuerzas Armadas hacia 1935, y que en la Benemérita afloró a partir de la *sanjurjada*, agudizándose con el paso de los meses, alimentada por la obstinada torpeza de los distintos Gobiernos en materia de personal y la propia dinámica en la que había entrado el país.

Esta división se había manifestado con toda su crudeza durante la subversión de octubre del 34, cuando las investigaciones para depurar responsabilidades demostraron la implicación de algunos oficiales en la revolución. Fue el caso del teniente Fernando Condés, que resolvió sumarse al movimiento subversivo al frente de un grupo de subordinados de su Unidad, el Parque Móvil de Madrid.

Entre los cómplices con los que contaba Condés estaban los tenientes Faraudo, Moreno y Castillo, éstos dos últimos de la Guardia de Asalto, vinculados también al socialismo, a cuyas juventudes unificadas instruían. Como consecuencia de esta activa participación, Condés fue condenado a cadena perpetua y expulsado de la Guardia Civil. Pero

no llegaría a expiar su culpa. El triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 le reportó el indulto, reingreso en la Guardia Civil (orden de 1 de julio de 1936) y un día después el ascenso a capitán. Agradecido y preso de un fanatismo incontrolado por la muerte de su amigo el teniente Castillo a manos de falangistas, participaría en uno de los episodios más denostados, indignos y de más trágicas consecuencias en los que se vio envuelto un oficial de la Benemérita en toda su historia: el asesinato de Calvo Sotelo.

La mutación de Condés no sintonizaba ni de lejos con el sentir mayoritario del resto de sus compañeros, pero sí descubría la vía de agua en el hermético armazón que era la Guardia Civil hasta la *sanjurjada*. Una fisura que agrandó la política de agravios que ejecutaron los gobiernos de centro-derecha, y que se consumó tras las llegada al poder del Frente Popular, cuando al baile de destinos se unieron dos factores interrelacionados entre sí, claves en los tres casos para comprender la predisposición de parte de la Guardia Civil contra el Frente Popular y su posicionamiento en julio de 1936.

1. La hostilidad y agresiones de que eran objeto los guardias civiles por parte de organizaciones vinculadas al izquierdismo extremista, en medio de un creciente clima de deterioro del orden público al que se asiste tras las elecciones de febrero de 1936.

2. El descontento e inquietud que produjeron en las filas del Cuerpo el indulto a Condés y demás oficiales implicados en la revolución de octubre del 34, la amnistía de los condenados por la misma revolución y los campesinos de Castilblanco, y, sobre todo, que en el programa electoral del Partido Socialista se contemplase abiertamente la disolución de la Guardia Civil.

3. La obstinada perseverancia en la política de ceses y nombramientos de mandos y oficiales de la Guardia Civil.

La guerra incivil

La sublevación sometió a la oficialidad de la Guardia Civil a la durísima prueba de a que bando apoyar. La decisión era comprometidí-

sima, porque en el ánimo de los guardias civiles no pesaba solamente el disgusto que reinaba en las filas del Cuerpo por las razones apuntadas. Llegado el 18 de julio, jugaron también circunstancias personales, el entorno que rodeaba a cada oficial y supropia ideología.

También el sentir de los hombres que les estaban subordinados. En vista de los antecedentes, la mayoría de los guardias civiles eran conscientes de que tendrían que luchar por algo más importante que sus valores y sentido del deber. Lo iban a hacer por su idea de España y, sobre todo, por su propia supervivencia y la de sus familias, como la historia reciente –revolución de 1934 incluida– les había trágicamente enseñado.

Así las cosas, la situación destacó tres posiciones diferenciadas sobre la conducta adoptada por los mandos de la Guardia Civil en el momento de la sublevación. Una fue de resuelto apoyo a la sublevación. Otra de inequívoca lealtad al Inspector General, y por tanto al Gobierno. La tercera fue de ambigüedad y neutralidad, a la espera del discurrir de los acontecimientos. Tanto por el peso específico de la Institución, como por el volumen y calidad de su fuerza, cualquiera de las dos primeras posiciones eran decisivas para el éxito o fracaso de la sublevación.

En julio de 1936, la Guardia Civil tenía 32477 hombres distribuidos en 59 Comandancias. Esta fuerza, si bien cuantitativamente no eran decisivas –representaba el 31,88% de los efectivos en filas que tenía el Ejército español– cualitativamente era de un valor formidable, en especial si se concentraba, por cuanto se trataba de hombres veteranos, curtidos en situaciones difíciles, abnegados y, sobre todo, disciplinados. Tenían, también, un gran valor estratégico, dado que en varias capitales de provincia eran la guarnición más numerosa.

De esta importancia eran conscientes los dos bandos que iban a dirimir sus diferencias durante la guerra. Era el caso del general Franco, que tantas veces como había sido invitado a participar en la sublevación, su principal preocupación era conocer en que disposición estaba la Guardia Civil. Lo mismo ocurría en el bando republicano, donde el director general del Cuerpo, el general Pozas, había recibido el encargo de abortar cualquier veleidad antigubernamental, y cuando la subleva-

ción se produjo, se apresuró a ordenar a los mandos provinciales que se pusiesen a disposición de las autoridades legalmente constituidas, exhortándoles a que permaneciesen leales al Gobierno legítimo, combatiendo con rigor todo brote de insurrección.

Los hechos demostrarían que ni Franco ni el Gobierno estaban descaminados en sus planteamientos sobre la importancia de la Guardia Civil. Como se esperaba, el posicionamiento de la Benemérita resultó decisivo para el éxito o fracaso de la sublevación, lo que llevado al escenario de las dos capitales más importantes del país, adquirió una dimensión trascendental para el devenir de la rebelión, abortando los planes de los sublevados para la rebelión se solventase rápidamente. En Madrid, porque el apoyo de la Guardia Civil al gobierno contribuyó a que fracasase el proyecto de conspiración con centro en el cuartel de la Montaña. En Barcelona, porque la resuelta posición del general Aranguren, jefe de la Zona, a favor de las autoridades autonómicas condenaron a las tropas rebeldes del general Goded a la rendición cuando las unidades del Cuerpo salieron a sofocar la resistencia de los militares sublevados, privando a éstos del formidable potencial estratégico, logístico y económico que tenía Cataluña. Y aún más: convertiría a esta región en plataforma desde donde las milicias antifascistas lideradas por Durruti, Farrás y García Oliver organizaron sus columnas para sofocar la rebelión en el camino natural de Cataluña a Madrid, y una vez en la capital del Estado contribuir a su defensa.

Además de las dos grandes capitales del país, también destacó el papel de la Guardia Civil en Navarra y en Canarias, dado el significado que para la sublevación tenían los generales que la encabezaban en estas regiones: Mola y Franco. Precisamente por la ascendencia y personalidad de ambos, Pozas había considerado fundamental colocar al frente de las Comandancias a jefes de su confianza. A Navarra fue destinado el comandante José Rodríguez-Medel cuando los informes de la visita de Alonso Mallol a Pamplona detectaron lo avanzado de los planes rebeldes. La lealtad de Rodríguez-Medel al Gobierno le valió la animadversión de sus subordinados, conocedores de la misión que había llevado al

comandante a Pamplona, y desencuentros con el general Mola, jefe militar de la plaza y director de la conspiración. Aún así, Mola intentó convencer a Medel para que se sumase a la rebelión, a lo que el comandante se negó. Así las cosas, cuando reunió a sus hombres en el patio de armas de la Comandancia, se encontró con la negativa de secundarle y entonces sobrevino su trágico final. Un guardia civil le disparó a quemarropa cuando intentaba ganar la salida del acuartelamiento de la calle Ansoleaga (18). Con la muerte de Medel, el general Mola tenía el camino despejado para ejecutar su plan, y se aprestó a lanzar sus columnas sobre Madrid.

En Canarias el teniente coronel Baraibar, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas, se debatió durante la jornada del día 17 de julio entre acceder a las presiones del entorno de Franco para que apoyase la rebelión y obedecer las órdenes de Pozas de detener a Franco, vivo o muerto. Al final optó por desoír ambas peticiones y mantenerse neutral, lo que permitió a Franco viajar desde las islas hasta Marruecos para ponerse al frente de las tropas africanistas.

En otras regiones de acusada hostilidad, como Andalucía, el papel de la Guardia Civil tampoco fue menor, e incluso puede afirmarse que alcanzó la categoría de decisivo a favor de los sublevados. Porque en el éxito de Queipo de Llano fue clave la ayuda de la columna de guardias civiles de Huelva que a las órdenes del comandante Haro Lumbreras desobedeció las órdenes de Pozas, y tendió una emboscada a los mineros de Riotinto que dirigidos por el diputado Cordero Bell hostigaban el barrio de Triana, en Sevilla, haciendo difícil la resistencia de los rebeldes. Con la capital andaluza controlada, a Queipo le resultó fácil dominar la mayor parte de la región, lo que sería fundamental para la estrategia de los sublevados, pues además de dominar a la población hostil, como era el campesinado andaluz, facilitó que el grueso de las tropas africanistas pudiesen trasladarse a la Península y que el contingente militar más numeroso, disciplinado y curtido del ejército español pudiese operar con la contundencia que le fue propia.

Por su parte, para la Guardia Civil, la acción de Haro Lumbreras tendría inmediatas conse-

cuencias, pues contribuyó a aumentar la presión que sobre ella se ejerció en amplias zonas del campo andaluz, en donde la violencia se centraría en ataques a la Benemérita recluida en sus cuarteles. La violencia de los ataques fue tan extrema, que muchos guardias civiles perdieron su vida en estas defensas. Ejemplos como los de Tocina, Guadix, Morón, Branca, Arahal, Baena, son ejemplos de aquella sinrazón. En total se estima que más de 700 guardias civiles perdieron la vida sólo en las provincias de Sevilla, Granada y Córdoba. Baste decir, que en la madrugada del 5 al 6 de agosto de 1936 fueron fusilados los 30 guardias civiles que se hallaban prisioneros en la cárcel de Cazalla de la Sierra.

A partir del 21 de julio la situación se estabilizó y como el resto del país, la Institución quedó dividida en dos zonas, con un 59% de sus efectivos en la Republicana y el resto en la Nacional. De lo ocurrido durante el resto de la contienda, tres son los aspectos que cabría destacar a la hora de analizar el papel de la Guardia Civil. Primero, la trayectoria radicalmente opuesta que siguió el Cuerpo en cada uno de las zonas. Segunda, la dura represión a la que fueron sometidos los guardias civiles, especialmente en la zona republicana. Tercero, la cesión del protagonismo a las unidades del Ejército, pero sin dejar de participar activamente en los combates que se libraron, bien sometida a asedios, bien formando parte de las columnas que protagonizaron buena parte de la contienda.

Respecto al primer punto, mientras en la zona nacional continuó sin apenas alteraciones en su funcionamiento y organigrama, en la republicana la evolución derivó hacia el caos organizativo, en parte motivado por la incomodidad de los guardias civiles con la situación de indisciplina y desorden que se vivía.

La zozobra que se percibía en la zona republicana por el futuro del Cuerpo estaba cargado de negros presagios a causa de las depuraciones y el rumbo que tomaba la vida política en la República, de lo que preocupa ya la radicalización de los planteamientos de quienes habían asumido el poder, con frecuencia aquellos a quienes los guardias civiles se habían visto obligados a combatir en muchas ocasiones al otro lado de la barricada callejera. Luego, la escasa profesionalidad de

buena parte de los mandos de las milicias y la indisciplina de las unidades, contribuían a llenar de temores a los guardias civiles, que veían en el bando nacional la solución a su inquietud. En el bando franquista, la sensación de orden y profesionalidad era, junto al respaldo explícito a la Guardia Civil dado desde el cuartel general de Burgos, motivo de tranquilidad, porque a los guardias civiles la sola idea de que el Cuerpo pudiese desaparecer les daba pavor. Esta sensación hacía que arraigase cada vez con más fuerza la idea de pasarse a la zona nacional, aún a sabiendas de que una vez en ella debían someterse a un expediente de depuración de responsabilidades para determinar su grado de implicación política o de participación en la zona republicana (19).

La desconfianza que esta actitud causaba en las filas republicanas provocaría una reacción en cadena contra la Guardia Civil, que culminaría en su eliminación de facto. Al cese y baja definitiva en el Cuerpo de todos aquellos guardias civiles que hubieran tenido participación en la sublevación (decreto de 26 de julio de 1936), siguió el decreto de la presidencia de la República de 2 de agosto, por el que se creaban en Madrid los Batallones de Voluntarios, cuya recluta se haría entre los milicianos (20). La medida era de una trascendencia formidable. Además de perder el carácter selectivo que tenía el ingreso en la Guardia Civil, se producía una politización y pérdida de autonomía a favor de las formaciones frentepopulistas y los comités antifascistas, que suponían una bolchevización del Cuerpo, una de cuyas primeras manifestaciones sería la aparición de los comités de depuración y la suplantación de la autoridad de los mandos naturales por milicianos procedentes de los comités antifascistas. Se extendió entonces el temor entre los guardias civiles de que a la depuración seguiría la asunción de competencias de seguridad por parte de voluntarios identificados con el denominado movimiento antifascista, y continuaron las deserciones y protestas ante las autoridades frentepopulistas, lo que sólo sirvió para acelerar el proceso de disolución. El primer paso fue el decreto de 30 de agosto de 1936, por el que se disponía que el Cuerpo pasase a denominarse “Guardia Nacional Republicana”

Realmente, todo fue diferente a partir del decreto de 30 de agosto de 1936, pues desaparecía el concepto tradicional de Guardia Civil y aparecía otra formación policial distinta, marcadamente politizada, no profesional y de tintes revolucionarios (21). Una formación, en suma, que veía suplantada su tradicional estructura orgánica y jerárquica por otra donde los Comités revolucionarios pasaron a ejercer el control y la función directiva.

Se asistía, por tanto, a una revolución dentro de la Guardia Civil republicana. Una revolución de abajo arriba, favorecida por el dominio que ejercían en el gobierno de la España republicana las formaciones sindicales, anarquistas y comunistas, que encontraron la complicidad de aquellos componentes del Cuerpo que, más atraídos por los deseos de venganza sobre quienes habían sido sus jefes y por las posibilidades de un rápido ascenso que por firmes ideales revolucionarios, se aprovecharon de las simpatías de la mayoría de la oficialidad hacia el bando rebelde para dar un golpe de timón, dinamitar la estructura del Cuerpo y hacerse con sus riendas.

La dinámica desfavorable en la que entró la guerra para la zona republicana, haría que la radicalización de los planteamientos revolucionarios corriese a ritmo frenético. La seguridad pública no escapó al frenesí de cambios que se produjeron y la precaria estructura con la que había sido dotada la GNR, su politización, el imparable goteo de deserciones de exguardias civiles para pasarse a las filas franquistas, aumentado a medida que el rumbo de la guerra se decantaba del bando nacional, fueron junto a la incompetencia de sus cuadros de mando, las razones para que a finales de 1936 asistiéramos al derrumbe del proyecto revolucionario que había sustituido a la Guardia Civil en forma de GNR. El primer paso que certificó su colapso lo dio el decreto de 26 de diciembre, que creó el Cuerpo de Seguridad, un híbrido de todos los cuerpos de seguridad existentes en la zona republicana (Cuerpos de Vigilancia –denominación reservada al Cuerpo de Carabineros–, Seguridad, Asalto y GNR), y para cuya aplicación se estableció un plazo transitorio que finalizó cuando el 13 de agosto de 1937 la *Gaceta de Madrid* publicó un nuevo decreto que puede ser considerado el finiquito de la Guardia Civil en la España republicana.

En la zona nacional la situación fue diferente, y la Guardia Civil gozó de más consideración. De hecho, fueron mayoría las ocasiones en la que se respetó la jerarquía de sus mandos naturales, que aún formando parte de columnas militares, se le encomendaron misiones de vanguardia o limpieza de determinados territorios, como la compañía de “la Calavera”, así denominada por figurar en su distintivo una calavera con las iniciales G.C, sobre un fondo de color negro. Organizada por el capitán Roger Oliete Navarro con guardias civiles que habían logrado pasarse de la zona republicana a la nacional en Puebla de Valverde, llegó a contar con 195 guardias civiles.

Con todo, lo más destacado de la Guardia Civil en este bando fue su papel en los asedios. En su origen, de nuevo el temor de los guardias civiles a ser represaliados si se entregaban a las tropas republicanas. Y *sensu contrario*, el miedo de los milicianos a que si no conseguían la subordinación de los guardias civiles, éstos podían robustecer la fortaleza de los nacionales con una retaguardia aguerrida y experta. A esta última razón se añadía el odio que sentían los frentepopulistas hacia la Guardia Civil, y que explica en última instancia la violencia con la que atacaron los cuarteles y la falta de benevolencia con los guardias civiles una vez vencida su resistencia.

Por tanto, conocedores de lo que experiencias pasadas les habían enseñado y de las noticias que llegaban desde distintos puntos sobre la suerte que habían corrido sus compañeros, en varias zonas los mandos de la Benemérita decidieron refugiarse con sus familias en lugares que consideraban seguros para su defensa, a la espera de ayuda o de que el devenir de los acontecimientos les fuese favorable. Los tres ejemplos más relevantes se dieron en Oviedo, en Toledo y en el aislado enclave del Santuario de la Virgen de la Cabeza, en la provincia de Jaén.

En Asturias, la fuerza de la Guardia Civil que había conseguido escapar a tiempo de los ataques milicianos (no pudieron hacerlo los de las cuencas de Sama de Langreo, Mieres y La Felguera, que sucumbieron a las iras de los mineros) tenía la orden de concentrarse en Oviedo. En total 1300 guardias civiles se unieron a la guarnición de la plaza, unos 900 hom-

bres, entre militares y guardias de asalto, y 850 paisanos, en su mayoría falangistas. Mandaba esta fuerza el coronel Aranda, gobernador militar de la plaza, que sólo obedeció la orden de Mola para sublevarse cuando se aseguró de tener el número suficiente de guardias civiles a su disposición. Lo hizo el día 20, y dos días después comenzó el asedio, que se prolongaría por ochenta y cinco largos días. Finalmente, el 17 de octubre, cuando las fuerzas y las municiones eran escasas, los sitiados recibieron la ayuda de las columnas gallegas que mandaba el coronel Pablo Martín Alonso, y el asedio de Oviedo tocó a su final.

En Toledo, el teniente coronel Jefe de la Comandancia, Pedro Romero Basart, tenía muy claro desde el primer momento de que bando posicionarse. Había sufrido la política de destinos del Frente Popular y había estado procesado por su participación en la *sanjurjada*. Previa la sublevación, había transmitido una orden reservada a todas las unidades con la clave “siempre fiel a su deber”, que implicaba la prohibición de obedecer cualquier orden que no proviniese de él. Un total de 690 guardias civiles con sus familias (570 mujeres y niños) se agruparon en la ciudad imperial. Romero Basart acordó con el mando militar más caracterizado de la plaza, el coronel Moscardó, declarar el estado de guerra y refugiarse en la fortaleza de El Alcázar. El día 22 de julio la aviación republicana hizo los primeros ataques sobre la fortaleza, al tiempo que sus tropas de tierra tomaban posiciones para el asalto. Las fuerzas de la Guardia Civil fueron decisivas en la resistencia. Además de que representaban el 57,78% del total de defensores, se añadía su veteranía y determinación, robustecida por la presencia de sus familias. Sólo así puede entenderse el estoicismo demostrado ante los brutales ataques que sufrió la fortaleza, hasta quedar prácticamente destruida y sus muros enrojecidos por la sangre de sus defensores muertos, entre ellos 55 guardias civiles. Por fin, el 27 de septiembre, tras más de dos meses de asedio, las tropas africanistas del general Varela liberaron El Alcázar. El significado de la acción fue tan notable como dispar para ambos bandos. A pesar de no ser un objetivo militar prioritario, la defensa de Toledo había acaparado la aten-

ción de medio mundo, y su liberación tuvo un impacto enorme para la opinión pública: al tiempo que hacía creíble la fortaleza de los nacionales, elevaba su moral y reforzaba el liderazgo de Franco, debilitaba la de los republicanos. Para la Guardia Civil, serviría para que el general Alonso Vega, una vez nombrado Director General de la Guardia Civil por Franco, pudiese utilizar el heroísmo y la lealtad de los guardias civiles defensores de El Alcázar como arma para defender la continuidad del Cuerpo en la España franquista, como veremos en el siguiente capítulo.

La misma utilización se hizo del Santuario de la Virgen de la Cabeza, un enclave aislado en plena serranía jienense, alejado del teatro de operaciones y, por tanto, sin interés estratégico, pero que fue uno de los ejemplos de mayor estoicismo por parte de un centenar de guardias civiles, que a las órdenes del capitán Cortés, sufrieron nueve meses de durísimo asedio, hasta que diezmados, exhaustos y sin víveres ni munición, tuvieron que rendirse.

En los frentes de combate, la situación de los guardias civiles tampoco era mejor. La necesidad que tenían ambos bandos de contar en sus filas con su experiencia y disciplina, hizo que desde el primer momento los integrasen en las columnas de combate o delegasen su dirección en oficiales leales. Esta necesidad explica que desde el momento de quedar fijado el frente de Madrid, el general Miaja, nombrado jefe del Ejército republicano del Centro, ordenase que la mayor parte de los guardias civiles concentrados en la capital partiesen hacia la sierra madrileña, donde se iban a librar encarnizados combates, especialmente hasta el día 25 de julio. Esta importante participación y la agresividad del frente madrileño, explica el que sólo en los tres primeros meses de la contienda cayeran 3125 guardias civiles en la defensa de Madrid. De la misma forma, fueron frecuentes las llamadas para que los guardias civiles reforzasen las líneas del frente en las diversas zonas de combate, y lo fue tanto en la zona nacional como en la republicana, a veces con resultados trágicos para los guardias civiles, fusilados si caían en manos del enemigo, como el caso de Beasain, donde los guardias civiles de la columna que hizo frente al coronel Beorlegui en su camino hacia San Sebastián fueron fusilados nada

más caer prisioneros. Varios sucesos más ilustran esta conducta, en especial en la zona republicana, convirtiendo a la Guardia Civil y a sus hombres en una de las principales víctimas institucionales de la guerra civil.

NOTAS

(1) Figueroa, Álvaro, Conde de Romanones; *Y sucedió así*. Madrid, 1947, pág. 29.

(2) El gesto de Sanjurjo de dirigir el despliegue de la Guardia Civil a lo largo del recorrido, fue de respeto a la persona del rey; "Lealtad de la Guardia Civil", en *Revista Técnica de la Guardia Civil (RTGC)*. Madrid, 1931; págs. 242-243.

(3) *RTGC*, junio 1931.

(4) *Ibidem*

(5) Rivas Gómez, Fernando; "La República en marcha: de Arnedo a la sublevación de agosto", en *Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil (REHGC)*; núm. XIX; págs. 127.

(6) Artículo de Valentín F. Cuevas para *Las Provincias* de Valencia, 13 de diciembre de 1931.

(7) *Ibidem*; pág. 206.

(8) Calderón, Ricardo; pronunció estas palabras durante su exposición de cargos contra los acusados de la matanza de los guardias civiles durante el Consejo de Guerra celebrado en julio de 1933. Cervero Carrillo, José Luis; "Castilblanco", en *Revista Guardia Civil*, julio 1996.

Esta es la opinión de Esteban Infantes; *General Sanjurjo*. Madrid, 1957; pág. 171.

(10) Para un conocimiento ampliado de lo que ocurrió en Riotinto, véase a López Corral, M; "*La Guardia Civil en la Restauración*". Madrid, 1905; págs. 493 a 498.

(11) *Ibidem*...; pág. 139.

(12) En esta población toledana, el 8 de julio de 1932 campesinos armados dirigidos por el alcalde del pueblo, de filiación comunista, cercaron el pueblo para impedir que nadie saliese de la localidad y se dedicaron a quemar eras y trigales. Presos del pánico, los propietarios acudieron en ayuda de la Guardia Civil para que pudiese freno a los desmanes. Seis guardias civiles del Puesto, secundados por una veintena de vecinos, salieron al encuentro de los amotinados, pero fueron atacados y obligados a refugiarse en una casilla de las afueras del pueblo, donde se hicieron fuertes. En medio de la refriega, el capitán de la Compañía intentó romper el cerco, pero su vehículo fue alcanzado por varios disparos que produjeron la muerte de su ordenanza, el guardia civil Pedro Cabello. El tiroteo se prolongó por espacio de varias horas, con un saldo de varios guardias heridos, dos comunistas y un derechista muertos. Al fin, en la tarde del trágico día, arribaron al pueblo doscientos guardias civiles a las órdenes del Director General del Cuerpo, general Cabanellas Ferrer, e impusieron la calma en el pueblo. Rivas; "La República en llamas"; pág. 149.

(13) Un estudio pormenorizado de la sublevación del 10 de agosto puede verse en el trabajo de un oficial de la Guardia Civil, testigo de excepción del pronunciamiento en la capital sevillana, Díaz Carmona, Antonio: "El 10 de agosto de 1932", escrito para la *Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil* números II y IV. Madrid, 1969 y 1970, respectivamente.

(14) Poco después, el 19 de noviembre de 1932, corría la misma suerte el Cuerpo de Carabineros, que pasaría a depender exclusivamente del Ministerio de Hacienda.

(15) El 12 de agosto de 1933 el Ministerio de la Gobernación aumentó el haber de los empleos más bajos, fijando además una bonificación adicional anual que iba desde 275 a los guardias civiles hasta las 500 a los sargentos, aumentadas en una gratificación para toda la tropa de 375 pesetas por cada quinquenio de antigüedad.

(16) *RTGC*, 1935; pág. 364.

(17) Véase a Munis, G; *Jalones de derrota, promesa de victoria*; Madrid, 1977.

(18) Durante mucho tiempo se atribuyeron los disparos que acabaron con la vida de Rodríguez Medel al guardia conductor a las órdenes del teniente Arricivita Vidondo, que mandaba la Línea de Elizondo, pero investigaciones recientes apuntan a que fue el propio conductor que tenía Rodríguez Medel.

(19) Una vez consumaban su paso a la zona nacional, los guardias civiles eran llevados a campos de concentración, donde permanecían mientras se depuraban sus responsabilidades en la zona republicana contra la causa nacional. Una vez cumplido este trámite y de no existir responsabilidad, eran destinados a las Unidades que funcionaban en zona nacional. Durante el tiempo que duró la guerra civil, en el bando nacional se siguió la política de no permitir el ingreso en la Guardia Civil de nadie que no fuesen aquellos aspirantes que habían solicitado ingresar en el Cuerpo antes del 18 de julio de 1936. Esta medida protegió a la Guardia

Civil de la posible intoxicación de falangistas, requetés, etc y consiguiendo politización del Cuerpo, al contrario de lo que se haría en la zona republicana.

(20) *Gaceta de Madrid*, núm. 216, de 2 de agosto de 1936.

(21) Las manifestaciones externas también tenían una orientación revolucionaria. Si bien la uniformidad apenas cambió en un principio, y continuó la que tenía la ex Guardia Civil, se sustituyó el emblema clásico con la "GC", por una estrella roja de cinco puntas.